

CONV 450/02

WG XI 3

NOTA

de la: Secretaría

al: Grupo XI "Europa Social"

Asunto: Resumen de la reunión celebrada el día 6 de diciembre de 2002

Resultado de los trabajos

1. Apertura de la reunión a cargo de la Presidencia

El Presidente dio la bienvenida a los miembros de la reunión constitutiva del Grupo.

El Grupo acordó que, debido al elevado número de integrantes que lo componen, se establecieran las mismas normas que rigen en los demás grupos para la participación en las reuniones, a saber, asistencia únicamente de los miembros, con un ayudante inscrito en la Secretaría con suficiente antelación para dar cuenta al Servicio de Seguridad del Parlamento y disponer a tiempo de las acreditaciones.

2. Mandato del Grupo

El Presidente se refirió al mandato del Grupo aprobado por el Pleno, exponiendo detalladamente su visión de las distintas cuestiones que abarca el mandato impartido al Grupo.

Presentación a cargo del Presidente

a) La primera pregunta se refiere al artículo 2 del anteproyecto de Tratado Constitucional, en el que está previsto definir brevemente los valores fundamentales de la Unión. ¿Qué valores debe comprender esta disposición en el ámbito social, teniendo en cuenta los que ya aparecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE?

El artículo 2 del anteproyecto de Tratado Constitucional presentado a la Convención por el Praesidium el día 28 de octubre tiene por finalidad definir los valores de la Unión. El proyecto de texto indica los valores fundamentales, por ejemplo, la dignidad humana, los derechos fundamentales, la democracia, el estado de derecho, la tolerancia y el respeto de las obligaciones y del derecho internacionales.

En los Tratados actuales, los preámbulos y, especialmente, el artículo 2 del TCE y los artículos 1 y 2 del TUE exponen los valores generales y los objetivos fundamentales de la Comunidad y de la Unión. Entre los valores expresados están la adhesión de la Unión a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y estado de derecho, la adhesión a los derechos sociales fundamentales, el deseo de fomentar la solidaridad, un alto nivel de empleo y protección social, el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, el crecimiento sostenible y la igualdad entre el hombre y la mujer.

En la Convención se da un amplio consenso para integrar la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado Constitucional, haciéndola así jurídicamente vinculante. En particular el capítulo IV, relativo a la solidaridad, pero también el capítulo III, relativo a la igualdad, establecen los valores y derechos fundamentales del ámbito social. El Grupo tiene que estudiar qué valores fundamentales y cardinales en el ámbito social deben plasmarse en el Tratado Constitucional, teniendo en cuenta que está previsto integrar la Carta en el Tratado.

b) La segunda pregunta se refiere al artículo 3 del anteproyecto de Tratado Constitucional, cuya finalidad es definir los objetivos generales de la Unión. El Grupo tiene que estudiar hasta qué punto deben incluirse en esos objetivos generales unos objetivos sociales y de qué modo hacerlo.

Además de los objetivos económicos de la Unión, el artículo 2 del TCE estipula que: "La Comunidad tendrá por misión promover un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer y la elevación del nivel de vida". El proyecto de Tratado Constitucional sitúa el fomento de un alto nivel de empleo y de protección social entre los objetivos de la Unión enumerados en su artículo 3. Una interpretación posible de un "alto nivel de empleo" es "el pleno empleo". El Grupo podría por tanto abordar la cuestión de si podría especificarse en el objetivo del pleno empleo una descripción amplia de un alto nivel de empleo. El Presidente señaló a los miembros la referencia al "acceso a los servicios de interés general" contenida en el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que constituye, según el mandato, una de las fuentes que han de inspirar al Grupo.

El artículo 136 del Tratado CE indica los objetivos de la Comunidad en el ámbito de la política social, a saber, el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.

El Grupo tiene que estudiar qué objetivos de la Unión relativos al ámbito social deben plasmarse en el Tratado Constitucional.

El Grupo debe tener en cuenta la posibilidad de que en la segunda parte del Tratado, que tratará de las políticas y contendrá todas las bases jurídicas, tal vez fuera oportuno exponer con detalle los objetivos de cada capítulo referido a una política determinada, lo que le permitiría hacer la lista contenida en el nuevo artículo 3 más corta y más general que la actual del artículo 3 del TCE. Esto sería quizás apropiado para la parte constitucional del nuevo Tratado.

c) La tercera pregunta se refiere a las competencias de la Unión. ¿Considera el Grupo que deben modificarse las actuales competencias de la Unión o de la Comunidad en asuntos sociales? En caso afirmativo, ¿qué nuevas competencias se otorgarían a la Unión o a la Comunidad en asuntos sociales y en qué categoría de competencias habrían de situarse?

Para logra los objetivos expuestos en el artículo 136 del Tratado CE, el artículo 137 de éste otorga a la Comunidad la competencia de aprobar unos requisitos mínimos en una serie limitada de ámbitos enumerados en el Tratado:

- la mejora del entorno de trabajo
- las condiciones de trabajo
- la seguridad social y la protección social de los trabajadores
- la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral
- la información y la consulta a los trabajadores
- la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión
- las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Comunidad
- la integración de las personas excluidas del mercado laboral
- la igualdad entre hombres y mujeres
- la lucha contra la exclusión social (añadido en Niza)
- la modernización de los sistemas de protección social (añadido en Niza).

Los Estados miembros siempre podrán imponer unas medidas más rigurosas.

Estas competencias son competencias compartidas de la Comunidad y los Estados miembros.

En determinados ámbitos (remuneración, derecho de asociación, derecho de huelga y derecho de cierre patronal) queda explícitamente excluida la actuación comunitaria (apartado 6 del artículo 137 del Tratado CE).

La pregunta 3 del mandato busca decidir si es suficiente la limitada relación de asuntos sociales en los que tiene competencias la Comunidad, según establece el Tratado. ¿Qué ocurre con las excepciones cuando está prohibida la actuación comunitaria? Si el Grupo recomienda que se añadan nuevas competencias, debe indicar si éstas han de ser exclusivas, compartidas o complementarias.

Asimismo, el Tratado CE tiene un Título VIII referido al Empleo. Pero el empleo se trata dentro de la competencia complementaria, lo que significa que los Estados miembros tienen competencia exclusiva para legislar y la Comunidad no está facultada para obligarlos a modificar su legislación.

Se pide a la Comunidad que contribuya a lograr un elevado nivel de empleo fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, en caso necesario, completando la actuación de éstos. En el ámbito del empleo siguen siendo competentes los Estados miembros. La Comunidad puede poner en marcha una estrategia coordinada de empleo que los Estados miembros tendrán en cuenta en su política de empleo. Para apoyar la aplicación de dicha estrategia, la Comunidad puede aprobar acciones destinadas a impulsar la cooperación por parte de los Estados miembros y apoyar la actuación de éstos. En este ámbito se excluye la armonización de la Comunidad.

El Grupo debe dar su punto de vista sobre este tema y proponer, en caso necesario, modificaciones del actual sistema relativo al Tratado Constitucional.

d) La cuarta pregunta se refiere a la función que podría darse al método abierto de coordinación a su posible lugar en el Tratado Constitucional.

Todos los miembros recibieron en septiembre un documento de la Secretaría elaborado para el Grupo VI "Gobernanza Económica" y referido a la coordinación de las políticas nacionales y al método abierto de coordinación (Documento de trabajo 15 del Grupo VI).

En este documento se explica el método y se dan ejemplos de sectores en los que se ha aplicado, por ejemplo para luchar contra la exclusión social.

Aunque en el informe del Grupo VI se indicaba que había un gran respaldo para incluir los objetivos, procedimientos y límites fundamentales del método de coordinación abierto en el Tratado Constitucional, esto no se vio enteramente confirmado por el debate del Pleno. El Grupo IX sobre "Simplificación" recomendó por su parte que habría que asignar estatuto constitucional al método abierto de coordinación, que supone la actuación concertada de los Estados miembros fuera de las competencias atribuidas por los tratados a la Unión. El Grupo IX añadió que no había que confundir eso con las competencias de coordinación otorgadas a la Unión por diversas bases jurídicas, sobre todo en los ámbitos económico y laboral.

La Convención mantuvo un debate, el 5 de diciembre, sobre el informe del Grupo "Simplificación", pero sobre esta cuestión no se llegó a ningún acuerdo, al mantenerse divididas las opiniones de los miembros.

Se pide al Grupo que estudie cuándo podría aplicarse el método abierto de coordinación. Se pide al Grupo que se plantee si debe incluirse en el Tratado Constitucional.

e) La quinta pregunta se refiere al vínculo que podría establecerse entre la coordinación de la política económica y la de la política social.

El Consejo Europeo de Barcelona dio mandato a la Comisión y al Consejo para que estudiaran la forma de racionalizar los distintos procesos de coordinación social y económica, para que los futuros Consejos Europeos de Primavera pudieran revisar y, si fuera necesario, adaptar el conjunto de las políticas económicas, sociales y medioambientales de la Comunidad. El Presidente recordó que precisamente esa semana los ministros de finanzas habían llegado a un acuerdo sobre unas propuestas que establecen una mejor coordinación para los trabajos preparatorios del Consejo Europeo de Primavera, basadas en un bloque único de la Comisión que incluye recomendaciones para las orientaciones generales de las políticas económicas y las directrices para el empleo.

La pregunta que tiene que hacerse el Grupo es si se puede y debe hacer más para lograr una mayor coherencia en la coordinación de la política económica y la política social. Sin duda, con las reformas ya en marcha se mejorará la coordinación entre los distintos ámbitos de actuación, pero la preparación, tanto en la Comisión como en el Consejo, sigue estando parcelada. ¿Hay otros cambios estructurales que pudiera recomendar el Grupo para avanzar más aún? ¿Habría que fusionar los procesos mismos? (por ejemplo, ¿deben las orientaciones generales de las políticas económicas atender más explícitamente a los objetivos sociales? En caso afirmativo, ¿de qué modo?)

f) La sexta pregunta se refiere a los procedimientos: ¿hasta qué punto deben ampliarse la codecisión y la votación por mayoría cualificada a asuntos que actualmente requieren la unanimidad?

El Presidente recordó que hay asuntos en los que la Comunidad puede aprobar unos requisitos mínimos (véase la letra c)). En estos casos, el Consejo actúa adoptando directivas por codecisión, y por tanto mediante votación por mayoría cualificada, con excepción de los cuatro ámbitos en los que el Consejo tiene que decidir por unanimidad. Estos ámbitos son

- la seguridad social y la protección social de los trabajadores
- la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral
- la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión
- las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Comunidad.

No obstante, el Tratado de Niza abrió la posibilidad de que el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al PE, decidiera que la codecisión es aplicable a estas cuestiones, excepción hecha del ámbito de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, que, por tanto, sigue estando supeditada a la unanimidad.

El Grupo debe pronunciarse sobre los ámbitos a los que se aplicará la unanimidad, con miras al nuevo Tratado Constitucional: ¿deja Niza suficientemente abierta la posibilidad de que el Consejo decida avanzar en la codecisión o debe establecer ésta el Tratado Constitucional para estos asuntos?

g) La séptima y última pregunta atañe al papel de los interlocutores sociales. El Título VI del anteproyecto de Tratado Constitucional trata de la vida democrática de la Unión. ¿Debe figurar el papel de los interlocutores sociales en el Título VI y, en tal caso, cuál debería ser ese papel?

Los Tratados actuales establecen un papel específico para los interlocutores sociales en el ámbito de la política social. En particular:

- El artículo 138 contiene una disposición general sobre la consulta a directivos y trabajadores, así como la obligación de la Comisión de consultar tanto a directivos como trabajadores antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social.
- El artículo 137 prevé la posibilidad de que los Estados miembros confíen a los interlocutores sociales la aplicación de determinadas directivas que se refieran al ámbito social.
- El artículo 139 prevé la posibilidad de establecer relaciones contractuales, incluidos acuerdos, entre la Comunidad y los interlocutores sociales. Cada acuerdo marco entre los interlocutores sociales con arreglo al artículo 139 del Tratado CE puede dar lugar a que el Consejo adopte directivas que simplemente plasmen el acuerdo sin cambiar una sola palabra de él. Como ejemplo cabe citar las directivas sobre el "permiso parental" (1996), "tiempo parcial" (1997) y "trabajo de duración determinada" (1999).

Además de estas disposiciones específicas del Tratado, el Consejo ha aceptado ahora que los interlocutores sociales tienen un importante papel que desempeñar en el "proceso de Lisboa". Éste ha adoptado la forma de "cumbres sociales" justo antes de los Consejos Europeos de Primavera, lo que brinda la oportunidad de que los interlocutores sociales expresen sus opiniones sobre los temas del orden del día del Consejo Europeo.

La pregunta 7 del mandato va bastante más allá de estos dos aspectos. Este Grupo tiene que decidir si el Tratado Constitucional debe incluir alguna referencia a los interlocutores sociales. Dado el carácter de este Tratado, el Presidente sugirió que el Grupo estudiase si los intereses de los interlocutores sociales abarcan un conjunto suficientemente amplio de ámbitos de actuación que justifique dicha referencia. ¿Haría falta una definición más clara de "interlocutores sociales"? ¿Debe seguir siendo una referencia general? (es decir, un presupuesto en el sentido de que directivos y trabajadores participen en aquello que afecte a sus intereses) ¿o debe precisarse más? (es decir, una obligación de consultar a los interlocutores sociales en ámbitos de actuación concretos, teniendo en cuenta la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en el nuevo Tratado) ¿Debe incluirse en el Tratado alguno de los mecanismos actuales de consulta, concretamente la "cumbre social"? En caso afirmativo, ¿debería estar en la primera parte o en la segunda?

3. Comparecencias

El Presidente sugirió que el Grupo invitara a especialistas a comparecer ante el Grupo. Sugirió que se invitara a la Comisaria DIAMANTOPOULOU y pidió a los miembros del Grupo que comunicaran a la Secretaría el nombre de otras personas a las que quisieran invitar, teniendo presente que el Grupo no tendría tiempo de oír a más de cuatro personas.

4. Calendario

Se distribuyó en el Grupo el proyecto de calendario elaborado por el Presidente con la Secretaría. Éste consideró que el calendario permitiría al Grupo cumplir sus plazos, dado que tenía que presentar su informe en la sesión plenaria de la Convención de los días 6 y 7 de febrero. El Grupo dio su conformidad al calendario propuesto.

El Presidente recordó que los trabajos del Grupo tenían que ser intensivos, ya que debía presentar su informe antes de que la Convención pudiera estudiar el proyecto de artículos correspondientes del Tratado Constitucional y el Praesidium estimaba que los trabajos sobre el proyecto de artículos debían comenzar a principios del nuevo año.

5. Programa de las próximas reuniones

Para la próxima reunión, el Presidente pidió a los miembros que enviaran a la Secretaría sus primeras observaciones por escrito sobre las preguntas 1, 2 y 3 para el 10 de diciembre a las 12.00 h, de forma que se pudieran debatir en la reunión del 11 de diciembre. Sugirió que, dada la premura de tiempo, los miembros deberían poder remitir para el 18 de diciembre otros comentarios por escrito a los puntos debatidos en la reunión del 11 de diciembre, de forma que la Secretaría pudiera elaborar un "anteproyecto de informe" sobre las tres primeras preguntas del mandato, dejando pendientes las demás para la reunión del 10 de enero.

El Presidente propuso un plan de trabajo para las siguientes reuniones. Tras la reunión del 11 de diciembre, se invitaría a los miembros a remitir sus observaciones por escrito sobre las preguntas 4, 5, 6 y 7 para el 6 de enero, para poder debatirlas en la reunión del 10 de enero. Tras esta reunión, el Presidente pediría a la Secretaría que elaborara un proyecto de informe, que podría estar listo para el 17 de enero y sobre el que podría trabajar el Grupo en sus dos últimas reuniones de los días 21-22 y 27 de enero.

El Grupo acordó proceder según las propuestas del Presidente.